**La dignidad y el decoro
de los jueces:
cimientos de la independencia e
imparcialidad judicial**

*Comunicación de la académica María Angélica Gelli
realizada en la sesión privada de la Academia
Nacional de Ciencias Morales y Políticas
el 10 de septiembre de 2025*

LA DIGNIDAD Y EL DECORO DE LOS JUECES: CIMENTOS DE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD JUDICIAL

Por la académica **MARÍA ANGÉLICA GELLI**

SUMARIO

- 1. Los sistemas y las personas en los sistemas. Reglas jurídicas y relaciones éticas**
- 2. El sistema judicial en la república democrática: funciones y garantías para los justiciables**
 - 2.1. Independencia**
 - 2.2. Imparcialidad**
 - 2.3. Dignidad y buena conducta**
- 3. Un caso de conducta judicial sorprendente, los interrogantes que planteó y las consecuencias que originó**
- 4. Los criterios de selección de jueces y la necesidad de neutralizar la discrecionalidad del Pleno del Consejo de la Magistratura**
- 5. La formación de los jueces. Deberes de las universidades y de la sociedad civil**

1. Los sistemas y las personas en los sistemas. Reglas jurídicas y relaciones éticas

Los sistemas constituyen “organizacion[es] de partes interrelacionadas e interdependientes que forman una unidad”; en particular en los sistemas sociales “contienen sistemas más pequeños”.¹ Ello implica que en las sociedades humanas existen estructuras organizativas diferentes pero interrelacionadas en armonía o en conflicto, regladas por normas jurídicas, éticas –derivadas, en muchos casos de las religiosas, con visos de universalidad– y consuetudinarias. El sistema político global de cada sociedad define las relaciones de poder según el modelo de gobierno y Estado que prevalece, del sistema institucional. El dato de la convivencia en la sociedad humana es ineludible y por eso las relaciones entre gobernantes y gobernados definidas en las normas jurídicas, derivan en reglas de ese tenor que regulan, también, las articulaciones de las conductas esperables entre gobernados.² He ahí los diferentes sistemas

¹ Cf. . THEODORSON, George A. – THEODORSON, Achilles G. –*Diccionario de Sociología*. Título del original inglés – A Modern Dictionary of Sociology. Paidós. Buenos Aires. 1ª edición. Pág. 261.

² Lo sostuvo con meridiana claridad el profesor Spota: “Siendo la convivencia humana dato no opcional, esto es dado que el hombre no puede no convivir, esa convivencia hace a su esencia y naturaleza”. Cf. SPOTA, Alberto Antonio –

dentro del sistema global: familiar, educativo, comercial –el mercado, típicas relaciones subjetivas– cultural en suma.

En la forma de gobierno y Estado –lo que se señala como sistema político global en nuestro país, la forma democrática, republicana, federal– anidan subsistemas en cada una de aquellas. Específicamente, los denominados poderes, legislativo, ejecutivo, judicial y del ministerio público. Todos regulados en la Ley Suprema o de Base, la Constitución Nacional. La eficacia de esta norma de organización general dependerá, precisamente y en primer lugar, de la calidad de los subsistemas establecidos. De cuán consistentes son con los objetivos tenidos en cuenta al crearlos.

Pero en los sistemas trajina la persona humana. Y, ésta, es radicalmente libre porque decide a pesar de los márgenes estrechos que sistemas autoritarios imponen. En los liberales, en ocasiones, los condicionantes sobre la

Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente- Plus Ultra. Buenos Aires. Argentina, 1975. Pág. 22 y ss.

libertad se originan en individualismos extremos, acríticos. Diría que el *talón de Aquiles* de los sistemas, por óptimos que se supongan, se encuentra en las conductas personales de quienes integren los sistemas o subsistemas. De la generalidad de las conductas, porque siempre habrá desobediencia y distorsiones. El problema –y lo que corrompe los sistemas, me parece– se presenta cuando, poco a poco, se naturaliza el desvío, se desplaza, ignora o cuestiona la moralidad que sostuvo la norma jurídica a la que se comienza a interpretar como límite conservador. Por cierto, no todas las normas jurídicas se asientan en la ética pero en la mayoría de los casos son, contienen algo más que la pura conveniencia u oportunidad de su sanción.

Particular importancia reviste los lugares comunes contruidos sin mayor análisis ni reflexión, en algunas circunstancias originados en medios de comunicación, que se afianzan en el colectivo de creencias y van desplazando el rigor y la racionalidad del pensamiento.

Sin embargo, los sistemas sólidos y racionales ¿no son, finalmente, eficaces para controlar las infracciones y

eventualmente sancionarlas si, como enseñaba Kelsen las normas se cumplen de dos maneras, en los casos en que se obedece lo dispuesto por ellas o, si no ocurre, se sanciona al incumplidor? ³ Entonces, ¿de lo que se trata es de evaluar la dinámica conductual completa? Por otro lado ¿pueden los mejores sistemas prescindir de la ética privada en los ámbitos profesionales? ¿Se trata solo de garantizar la moral pública y que no se cause daño a terceros como establece el Art. 19 de la Constitución Nacional? ¿El daño debe ser concreto o existe una exigencia mayor en determinadas circunstancias y a determinadas personas por la profesión que eligen, aunque el daño también esté presente? ¿Solo este daño concreto pueda sancionarse jurídicamente? ⁴ Dado que en los sistemas sociales existen otro tipo de sanciones a más

³ Cf. Kelsen, Hans, *Teoría pura del derecho. Introducción a la ciencia jurídica*, Traducción de Moisés Nilve, EUDEBA, Buenos Aires, 1960. Ver, en especial, pág. 73 y ss.

⁴ Es el antiguo debate acerca del alcance interpretativo del Art. 19 de la CN que deja fuera del alcance de las autoridades —y las reserva a Dios— las acciones privadas de la persona humana que “de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudique a un tercero”. Examiné ese debate y los razonamientos que iluminaron la complejidad de la cuestión desde diferentes perspectivas, entre otros, de Carlos Santiago NINO, Santiago LAGUERRE y Hernán GULLCO, en GELLI, María Angélica - *Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada*. Sexta edición, ampliada y actualizada. La Ley, Buenos Aires. 1ª reimpresión, abril de 2024. Tomo I, análisis del Art. 19, en especial, en lo referido a esos autores, Págs. 525, 526 y 529.

de las jurídicas ¿podría considerarse que los sistemas se corroen desde adentro, cuando se desestiman las obligaciones éticas?⁵

La disyuntiva entre sistema y conductas individuales y el peso específico que adquieren en las sociedades es, si duda, una cuestión problemática. Pero, así lo interpreto, a

⁵ Durante la primera semana de agosto de 2025 debían rendirse en la República Argentina las pruebas de evaluación para obtener una plaza de residencia médica, en bioquímica y en enfermería. Se presentó un número considerable de postulantes –más de 13.000 profesionales egresados de universidades públicas y privadas del país y del extranjero. En el proceso de selección se habrían verificado fraudes en las pruebas rendidas. El escándalo mayúsculo que se desató llevó a las autoridades evaluadoras a decidir que quienes habían obtenido calificaciones muy altas con un estándar específico, debían volver a rendir la prueba. Ninguno de quienes se presentaron a esta segunda evaluación alcanzaron los niveles anteriores. El episodio fue penoso y muy grave porque se trataba de profesionales que ya habían obtenido un título universitario en materias relacionadas directamente con el cuidado de la salud y la vida de los pacientes. Fragar un conocimiento que no se tiene y desatender la conducta ética degrada a los profesionales y a la profesión y desampara a las personas. El incidente puso en foco los desajustes del sistema de evaluación y del control del resguardo de las pruebas de evaluación que se elaboraron. Sin embargo, más allá de los controles que debían aplicarse, estaba en juego la moral de cada quién, el rigor y el respeto que se debían a sí mismos los postulantes a las residencias en centros médicos.

Puede leerse un lúcido análisis de las causas estructurales y la carencia de valores que dieron pie a que algunos postulantes olvidares sus deberes en ROMÁN, Luciano –*Detrás de los “anteojos biónicos”: la trampa y la ética profesional*– La Nación. Opinión. Buenos Aires, 14 de agosto de 2025.

pesar de los errores y las falencias con las que toda persona sin excepción carga, la moral *privada* es insoslayable en el resultado final.

2. El sistema judicial en la república democrática: funciones y garantías para los justiciables

Cuando la persona humana se enfrenta a conflictos con otra u otras que no puede solucionar en la dinámica de esas relaciones, si decide que un tercero la resuelva –y más si este integra la organización institucional de su comunidad– aspira a que lo haga con objetividad, independencia, imparcialidad. Si esas contiendas se generan con quienes ejercen el poder político en el sistema global aquella necesidad se hace imperiosa. De cómo resulte definida la cuestión dependerán las características y cualidades de la organización gubernamental. Aunque no solo de ella, como se sugirió en el punto anterior.

Desde que se dictó la Constitución histórica en 1853, se adoptó la forma republicana de gobierno, es decir la

división de poderes.⁶ En el orden nacional, el Poder judicial fue también dividido, en este caso en instancias jerárquicas, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores a los que alude el Art. 108 de la Ley Suprema. La creación y la competencia de los juzgados y tribunales anteriores a la Corte son atribuciones del Congreso que debe establecerlos en todo el territorio de la Nación. De su lado, los Estados federados de Argentina establecen sus respectivos poderes judiciales, tanto como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a los Arts. 5° y 129 de la Constitución Nacional.⁷

La Corte Suprema es el vértice del Poder Judicial del Estado argentino. Representa la más alta magistratura de uno de los poderes de la República, en pie de igualdad con los otros poderes establecidos en la Constitución. El número de integrantes del Tribunal es, desde 1860, una atribución

⁶ Sin desconocer, por cierto, otras notas de la república: publicidad de los actos de gobierno y derecho de acceso a la información pública; responsabilidad de los funcionarios públicos, periodicidad en los cargos, igualdad de todos ante la ley; la libertad de expresión en todas sus formas.

⁷ El Art. 75, inc. 12 de la CN establece el deslinde en la aplicación de los Códigos sustantivos entre los tribunales federales y provinciales.

del Congreso de la Nación porque se eliminó el número de nueve que hasta entonces tenía.⁸ La reforma aludida, se lo haya querido o no facilitó, entre otras causas, la inestabilidad de la Corte Suprema dado que habilitó al poder político a ampliar y reducir el número de miembros del Tribunal. Resulta obvio con solo considerar la historia del Poder Judicial en Argentina, pero conviene recordarlo, el poder político emergente de las elecciones populares usó y abusó de esa prerrogativa constitucional de mudar el número de integrantes de la Corte Suprema con funestas consecuencias porque más allá de la calidad personal y profesional de quienes fueron designados integrantes del Tribunal en cada circunstancia, con causa o sin ella, puso en cuestión la independencia de la Corte Suprema en el imaginario social.⁹

⁸ Según el entonces Art. 91 de la Constitución Nacional sancionada en 1853, “El Poder Judicial de la Confederación, será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, compuesta de *nueve jueces* y dos fiscales, que residirá en la Capital, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Confederación”.

⁹ Me he ocupado de esta cuestión en GELLI, “*Constitución de la Nación Argentina...*” (ver nota 3). Tomo II, Pág. 577 y ss., Tomo 1, Pág. 63 y ss. Nota 135, en que se discute la expresión “*mayoría automática*” que todavía se utiliza, pero menos, para referirse, críticamente, al modo de decidir de determinados jueces. También en “*El regreso a la Corte Suprema de cinco*

Dado que la Corte Suprema es un tribunal de justicia que resuelve controversias determinadas y un poder del Estado mediante el cual puede ejercer control de constitucionalidad en última instancia –atribución esta última que comparte con todos los jueces del país- la necesidad de la independencia se hace imprescindible. La Corte constituye la última instancia de apelación en el orden interno también en los conflictos de constitucionalidad, cuestión en la que se requiere la máxima prudencia porque mediante el ejercicio de esa atribución puede impedir la aplicación de normas emanadas de los otros poderes, siempre en los casos específicos en los que se acredite legitimación por agravio concreto.

Debe decirse que la decisión de la Corte Suprema es trascendente tanto cuando considera inconstitucional una norma como cuando la declara constitucional. En este sentido ilustra la sentencia en “*Tabacalera Sarandí*” –una larga controversia judicial acerca de intereses económicos de envergadura– en la que la Corte Suprema consideró

miembros”. La Ley Actualidad. Opinión. Buenos Aires, 28 de noviembre de 2006.

constitucional una norma tributaria de finalidad recaudatoria y, a la vez, extrafiscal –la salud pública– sosteniendo “que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la competencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso o las legislaturas provinciales... salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales...”¹⁰

Así, pues, la importancia de las funciones que cumple el Poder Judicial por sus efectos sobre los ciudadanos y sobre las relaciones de poder en el país requiere de sus integrantes independencia, imparcialidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y una conducta irreprochable.

2.1. Independencia

La Constitución Nacional establece garantías de independencia judicial en el Art. 110: la estabilidad de los jueces en sus respectivos cargos mientras dure su buena

¹⁰ Cf. consid. 12 y 13 de “*Tabacalera Sarandí S.A. c/EN – AFIP – DGI s/procedimiento de conocimiento*”. CS. CAF 8093/2018/CS1. CAF 8093/2018/3/RH14. CAF 8093/2018/5/RH16 (2025).

conducta y la intangibilidad de sus remuneraciones. Ello a más del derecho de defensa en los eventuales juicios públicos de responsabilidad de los magistrados de los que puede resultar su remoción (Art. 8º. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), que deben cumplimentarse con todas las garantías del debido proceso adjetivo. Por fin, el Art. 109 de la Ley Suprema dispone que “*en ningún caso* el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o reestablecer las fenecidas”.

Como señalé en su oportunidad, el 4 de enero de 2023 el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional instó a la autoridad del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de esa Cámara a formalizar el juicio político contra los cuatro magistrados que integraban el Tribunal. El texto que al respecto había elaborado el Presidente de la Nación implicó la violación del citado Art. 109 de la Constitución Nacional pues entre los cargos por mal desempeño de los jueces de la Corte incluyó una medida cautelar emitida por el Tribunal en un proceso que no había

finalizado.¹¹ A esta improcedencia se sumaron las reiteradas y desatinadas manifestaciones públicas que el Presidente emitía sobre la cuestión.¹² Pero estas conductas no constituyen la excepción. A propósito de la investigación judicial que se abrió por las muertes que habría causado la aplicación de un potente analgésico contaminado a comienzos de 2025, denominado fentanilo, la Oficina de la Presidencia, informó enfáticamente que si el magistrado interviniente no detenía al dueño del laboratorio implicado, lo recusaría. En cuestión las obligaciones ineludibles que el Estado, de dimensiones amplias o mínimas, tiene en materia de salud pública, la sobreactuación del Ejecutivo pareció más un intento de politizar el problema para diluir las responsabilidades que le podrían caber en el asunto por no

¹¹ Cf. GARCÍA LEMA, Alberto Manuel –*Una presentación que no tiene validez- Juicio político a los jueces de la Corte-*. *La Nación*. Buenos Aires. Argentina, 11 de enero de 2023.

¹² Desarrollé con mayor amplitud estos episodios y el devenir del juicio político que finalmente no prosperó en GELLI, María Angélica –*La institucionalidad argentina, el enjuiciamiento a la Corte Suprema y el alcance de la revisión judicial*. *Revista Jurídica de Buenos Aires – Año 48 – número 106 -2023-II Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires. Departamento de Publicaciones. Abeledo Perrot, 2023. TR LALEY AR/DOC/382/2024.*

ejercer el control requerido en la producción segura de medicamentos para la población.¹³

Estas maneras de violentar la independencia judicial, aunque crean una cultura de maltrato institucional y descrédito que puede resultar inmerecido, no son las más graves porque al hacerse públicas generan saludables reacciones críticas en la sociedad civil. En cambio, las que operan sin develarse ante la opinión pública no cuentan con ese reaseguro y –debe señalarse– pueden provenir tanto de los poderes políticos como de los económicos o sociales.

Por otro lado, una de las interferencias mayores sobre el Poder Judicial proviene de cuestionar en los juicios políticos que se promuevan, el contenido de las sentencias judiciales salvo que los fallos exhiban un desconocimiento claro del derecho o impliquen la comisión de un delito. La improcedencia de juzgar a los magistrados por el contenido

¹³ La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazó la intromisión del Poder Ejecutivo y recordó que existen recursos judiciales disponibles en los procesos para quienes los requirieran. Cf. La Nación, Buenos Aires, 15 de agosto de 2025.

de sus sentencias –y la violación, con ello, de la garantía de la independencia judicial establecida por la Convención Americana de Derechos Humanos– fue declarada por la Corte Interamericana en varios precedentes, entre otros en el caso “Ríos Ávalos y otro c/ Paraguay”.¹⁴ Tampoco debe removerse a los magistrados por el solo hecho de que su sentencia sea revocada por diferencias o matices en la interpretación normativa, ello garantiza la independencia interna de los jueces. Este tipo de independencia deriva de la horizontalidad de la judicatura en el dictado de los fallos que los jueces deben emitir en los casos sujetos a su competencia –a pesar del orden jerárquico del Poder Judicial– y en el autogobierno de la magistratura.

Párrafo aparte merece la modificación dispuesta por la reforma constitucional de 1994 en el Art. 99, inc. 4 que diluyó la inamovilidad de los jueces. Según dispuso la norma, la inamovilidad en el cargo cesa cuando los magistrados cumplen 75 años de edad, salvo nuevo nombramiento del presidente de la Nación, precedido de

¹⁴ Cf. Párr. 112, 113 y 114 de “Ríos Ávalos y otro c/ Paraguay” CIDH. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de agosto de 2021. Serie C. Nº 429.

igual acuerdo por parte del Senado. Estos nombramientos deben hacerse si es que así lo dispone el poder político, por el plazo de cinco años y podrán ser repetidos indefinidamente.¹⁵ Aunque la Corte Suprema consideró nula esta disposición –por no estar prevista su modificación en la ley declarativa de la necesidad de la reforma constitucional– en el caso “*Fayt*” diecisiete años más tarde, revirtió la sentencia en todos sus términos en el caso “*Schiffirin*”, convalidando así la cláusula constitucional reformada en 1994.¹⁶

Por fin de los mismos magistrados judiciales debe emanar la independencia que deben tener de sus propias cosmovisiones y preferencias. Todas estas actitudes

¹⁵ Puede leerse una certera crítica a esta disposición y a la reglamentación que efectuó el ministro de Justicia, nada menos que de una cláusula constitucional, en SEIJAS, Gabriela – *Qué quedó de la inamovilidad judicial luego de la reforma constitucional de 1994*- Suplemento Constitucional N° 2 La Ley. E-BOOK. Thomson Reuters, 2024.

¹⁶ Cf. “*Fayt*”. *Fallos* 322: 1616 (1999): En virtud de esta sentencia el juez permaneció en la Corte Suprema hasta su fallecimiento. Cf. “*Schiffirin*”. *Fallos* 340:: 257 (2017). En este caso se trataba de un magistrado de instancia anterior a la Corte Suprema quien, como no podía ser de otro modo, obedeció la decisión,

resguardan la independencia del Poder Judicial y van en línea con la imparcialidad.

2.2. Imparcialidad

Los jueces a más de independientes deben ser imparciales, con una imparcialidad subjetiva y objetiva. Esta exigencia es una garantía de los justiciables “para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, *o de cualquier otro carácter*”, tal como lo dispone el Art. 8º.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La imparcialidad subjetiva se resguarda en el Código Procesal Civil y Comercial mediante los mecanismos de las recusaciones que presentan las partes en los litigios o las excusaciones que plantean los jueces intervinientes. Se trata de evitar que los magistrados estén comprometidos en el

proceso, entre otros motivos, por intereses personales, de amistad, enemistad o parentesco con las partes.¹⁷

La imparcialidad objetiva exige que los magistrados no exhiban –en la controversia sometida a su decisión– sesgos específicos por haber intervenido o participado de alguna manera en procesos antecedentes o conectados con el que deben resolver. Este tipo de imparcialidad puede exigir del Estado, al estructurar la organización judicial, un especial cuidado para evitar que jueces que hayan tenido alguna intervención previa en un proceso vuelvan a participar en otra instancia del caso. Un ejemplo típico, por ejemplo, sería la situación de quien debiendo decidir la controversia haya emitido resoluciones en procedimientos previos que habilitaron el litigio de fondo afectando, de ese modo, el principio acusatorio en materia penal. Según sostuvo el juez Petracchi de la Corte Suprema de Justicia en el caso “*Llerena*” –con palabras de Ferrajoli– “para garantizar la imparcialidad del juez, es preciso que este no tenga en la causa ni siquiera un interés público o

¹⁷ Cf. Art. 17 CPCyCN que enuncia las causas de recusación. Las partes también tienen derecho a recusar sin causa a los magistrados.

institucional. En particular, es necesario que no tenga un interés acusatorio, y que por esto, no ejercite simultáneamente las funciones de acusación...”.¹⁸ Como se advierte, se trata de garantizar la imparcialidad absoluta en una materia, la penal, particularmente sensible para los procesados.

No obstante, cabe interrogarse acerca de si esta imparcialidad objetiva es trasladable en todos sus efectos en los casos en los que quienes son juzgados en los procesos públicos de responsabilidad son los jueces. En estas circunstancias, podría suceder que si no se extreman las garantías del debido proceso la inamovilidad de los magistrados quedara sujeta a los vaivenes políticos partidarios, debilitando, de manera indirecta, las garantías de los eventuales justiciables.

En la República Argentina, la delimitación y alcance de la imparcialidad objetiva exigida en los juicios públicos de responsabilidad –los juicios políticos o los jurados de

¹⁸ Cf. consid. 14 del voto del juez PETRACCHI en *“Llerena, Horacio Luis”*. Fallos 328: 1491. (2005).

enjuiciamiento a que pueden ser sometidos los jueces— ha recibido una protección ambivalente por parte de la Corte Suprema, más allá de las declaraciones generales. Por un lado, en el caso “*Frois*”, el hecho de que el tribunal que rechazó la apelación contra el fallo del Jurado de Enjuiciamiento que destituyó a este juez estuviera integrado por cuatro magistrados que a su vez conformaron el Jurado de remoción implicaba, para el juez removido, la violación del derecho a ser juzgado —en el caso a apelar— ante un tribunal imparcial con imparcialidad *objetiva*. Por ello, con cita de los precedentes “*Llerena*” y “*Dieser*”, el Tribunal revocó la sentencia de la Corte provincial y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento sobre la decisión del Jurado.¹⁹

Pero en “*Fiscal de Estado*” la Corte Suprema rechazó los agravios del juez destituido sosteniendo que el apelante no había cumplido la Acordada 4/2007 acerca de la exigencia de fundamentación concreta y razonada sobre de la violación de sus derechos a la defensa. Sobre la garantía del juez independiente e imparcial, el Tribunal consideró

¹⁹ Cf., en especial, consids. 5º, 7º, 8º y 9º de “*Frois, Mauricio s/ causa Nª 88/2011*”, *Fallos* 337:1081 (2014). Voto unánime de los jueces HIGHTON de NOLASCO, FAYT, ZAFFARONI y PETRACCHI.

que no se había violado tal garantía por el hecho de que dos vocales de la Corte provincial que rechazaron la apelación del removido juez Macchi, habían intervenido en un proceso del que se derivaron cargos para la remoción.²⁰ Aunque el Tribunal hizo mérito de la regla del caso “*Frois*”, consideró que las circunstancias específicas del caso no implicaban el desconocimiento de las garantías invocadas ni los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que “no puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial”.²¹

De estas dos sentencias parece claro que la Corte argentina está dispuesta a examinar si en los procesos de enjuiciamiento de magistrados se respetó la imparcialidad objetiva pero que no en todos los casos la reconocerá, dependiendo de los matices que presenten los hechos referidos a la eventual parcialidad. Diría que, hasta ahora, el control de la imparcialidad objetiva en los juicios políticos

²⁰ Cf. consid. 5º y 6º de “*Fiscal de Estado G. H. de Sanctis y otro c/ titular del juzgado en lo Civil y Comercial de Minería de la 5ª Nom. De San Juan s/denuncia*”. CS. 142/2015 RH1 (2016),

²¹ Cf. consid. 9º y 6º de “*Fiscal de Estado*”.

ha sido, en algunos casos, laxo. En consecuencia ¿podría implicar, por parte del Tribunal, un análisis pormenorizado de cómo, de qué manera, hasta dónde la intervención en el juicio político o en el jurado de enjuiciamiento de un juez que ya participó en instancias previas y sobre el cual se rechazaron las recusaciones afectó, efectivamente, la imparcialidad objetiva de quienes deben juzgar en su conjunto?

De su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ríos Avalos vs. Paraguay” declaró, en lo que aquí interesa, que “la garantía de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de *manera subjetiva*, de todo prejuicio y ofreciendo garantías suficientes, de *índole objetiva*, que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad”; que los recursos judiciales promovidos resultaron ineficaces, en el marco de la inobservancia de las *garantías contra presiones externas* - las advertencias del Congreso acerca de que sometería a juicio político a los magistrados que ampararan a los

destituidos- y que se había violado la imparcialidad, dado que miembros del tribunal juzgador evidenciaron un interés directo, una posición tomada de antemano, una preferencia por una de las partes en opiniones vertidas en la prensa sobre el interés de sectores políticos de efectuar cambios en el Poder Judicial.²²

2.3. Dignidad y buena conducta

Las causales de remoción de los magistrados judiciales son el mal desempeño, el delito en ejercicio de sus funciones y los crímenes comunes, igual que las que suscitan el enjuiciamiento de los demás funcionarios que enumera el Art. 53 de la Constitución nacional.²³ Por remisión del Art. 115 de la Ley Suprema, “los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos” por

²² Cf., en especial, párr. 118 y 122 y 165 de *Ríos Ávalos y otro vs. Paraguay*”. CIDH. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de agosto de 2021. Serie C. Nº 429. (Bastardillas agregadas).

²³ De acuerdo a esta disposición son sujetos del juicio político –además de los jueces de la Corte Suprema- el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete de ministros y los ministros.

idénticas causales, aunque mediante un procedimiento llevado a cabo por un jurado de enjuiciamiento.

Pero, y tal como lo dispone el Art. 110 de la Constitución, los jueces de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Según lo interpreto, en esta norma se añade una nueva causal de remoción de los magistrados judiciales, la de *mala conducta* que es personal y difiere, aunque esté relacionada, en algunas circunstancias, con el mal desempeño que es funcional.

La calidad de la conducta, comportamiento y acciones exigidas a los magistrados judiciales para permanecer en el cargo es mayor que la requerida a los otros funcionarios estatales por dos órdenes de motivos basados en la forma de gobierno –la república democrática– adoptada por el Art. 1º de la Constitución Nacional con perfiles propios.

Así, en primer lugar la fuente de legitimidad de los jueces desde las designaciones por el procedimiento establecido, depende de su idoneidad y conducta para permanecer en el cargo, pues no están sometidos a la revalidación de sus nombramientos mediante elecciones periódicas. En segundo lugar, la función que cumplen los magistrados judiciales está directamente relacionada con la garantía de los derechos humanos de los habitantes del país. En efecto, los jueces resuelven controversias en las que están en juego la libertad, la dignidad y los bienes de las personas; reconocen y fijan la magnitud de derechos en los casos concretos e imponen deberes. A más, la exigencia de buena conducta tiene su fuente directa en la Constitución Nacional, más allá de que los reglamentos de organización de la Justicia la impongan expresamente y establezcan prohibiciones específicas relacionadas con la buena conducta.

Las exigencias éticas a los jueces son mayores que las requeridas a los demás funcionarios. No constituyen una carga desmesurada o una violación del principio de igualdad. Significan y simbolizan cuán alta es la tarea de juzgar a los semejantes. La buena conducta debe exhibirse

hacia adentro y hacia fuera de las relaciones jurisdiccionales. Incluye el buen trato institucional entre magistrados, la medida en la exhibición pública de las discrepancias interpretativas u organizacionales, el rechazo, en fin, de cualquier maltrato o crítica agravante contra jueces colegas, profesionales intervinientes y partes en los procesos. La buena conducta de los jueces concreta la dignidad personal de los magistrados y de la judicatura.

Sin embargo, parte de la doctrina no distingue como causal autónoma de remoción la mala conducta y la subsume en el mal desempeño.²⁴

Como quiera que sea, la determinación de la mala conducta es compleja porque los jueces también están amparados por el derecho a la intimidad, que emerge del Art. 19 de la Constitución Nacional. En algunas circunstancias, además, la mala conducta puede derivar en

²⁴ Entre otros, cf. SAGUÉS, Néstor Pedro *–Elementos de Derecho Constitucional–* T I, 2ª edición actualizada y ampliada. ASTREA, Buenos Aires, 1997, Pág.562. También MIDÓN, Mario A. R. *–Manual de Derecho Constitucional Argentino–* Plus Ultra. Buenos Aires, 1997. Pág. 427.

mal desempeño cuando afecta la función. La mala conducta, también es difícil de establecer porque la expresión es indeterminada y debe concretarse en cada caso, en ocasiones con cierto grado de discrecionalidad, pero siempre, debe apoyarse en hechos graves, probados y adjudicados al magistrado con todas las garantías del debido proceso.

En consecuencia y para evitar que la indeterminación de la mala conducta pueda transformarse en evaluación arbitraria es útil –quizás necesario– el dictado de Códigos de Ética Judicial, tal como se elaboraron en algunas provincias argentinas.²⁵

En este sentido, el Código Iberoamericano de Ética Judicial ilustra –al enunciar principios– acerca del modo en que se fortalece la confianza pública en el sistema de justicia

²⁵ Cf., por ejemplo, las altas exigencias establecidas en el Código de Ética aprobado por la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, estableciendo criterios rigurosos para lograr los mejores jueces posibles mediante la creación de un Tribunal de Ética y un Consejo Consultivo. También, en el mismo sentido, el Código de Ética de los Jueces de la Provincia de Córdoba.

al preservar, en lo que aquí interesa, la *cortesía* –forma de exteriorizar el respeto y consideración debida por los jueces a sus colegas, a los otros miembros de la oficina judicial, a los abogados, a los testigos, a los justiciables y, en general, a todos cuantos se relacionan con la administración de justicia; en el deber de brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean pedidas; en mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos; la *integridad*– también fuera del ámbito estricto de su actividad jurisdiccional, evitando los comportamientos “que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función”. En suma, “el juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos”; en la *honestidad profesional* –los magistrados tienen prohibido recibir beneficios al margen de los que por Derecho le correspondan y utilizar abusivamente o apropiarse de los medios que se le confíen para el cumplimiento de su función; deben comportarse de manera que ningún observador razonable pueda entender que se aprovechan de

manera ilegítima, irregular o incorrecta del trabajo de los demás integrantes de la oficina judicial y adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir cualquier duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial; en la *transparencia*– en procura de “ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable”; en la relación con los medios de comunicación social, [el juez debe comportarse] de manera equitativa y prudente, y cuidar especialmente de que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes y de los abogados; “*debe evitar comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social*”.²⁶

Algunas de las conductas requeridas por este Código son indeterminadas y ello implica que en los casos concretos deben determinarse. Pero este, con serlo, no es el problema

²⁶ Cf. Art. Cap. VII, VIII, XIII y IX, respectivamente, del Código Iberoamericano de Ética, Aprobado por la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Versión reformada el 2 de abril de 2014 en la XVII Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Santiago, Chile. (Bastardillas agregadas).

mayor. La cuestión central consiste en que se cumplan esos mandatos éticos. Tal como se señaló “se apela al compromiso íntimo del juez con la excelencia y con el rechazo de la mediocridad, requiriendo de la idoneidad judicial como complemento de las exigencias jurídicas en el servicio de justicia”.²⁷

3. Un caso de conducta judicial sorprendente, los interrogantes que planteó y las consecuencias que originó

“...al cabo de más de treinta años la socavación de los estándares de seriedad es casi completa, con una ascendencia de la cultura cuyos valores más tangibles, más persuasivos se sacan de las industrias del espectáculo”

*Susan Sontag*²⁸

²⁷ Cf. PALACIO de CAEIRO, Silvia B. –*En Argentina ¿hay independencia judicial?* – En AAVV. *Independencia Judicial*. Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba. Directora Silvia B. PALACIO de CAEIRO. Coordinadora María Rosa MOLINA de CAMINAL. ConTexto. Resistencia. Chaco, 2024. Pág. 191.

²⁸ SONTAG, Susan –*Treinta años después*— La Nación (Cultura, Sección 6ª) Buenos Aires, 30 de junio de 1996.

El juicio oral y público en el que se examinaban las conductas de siete acusados de haber causado –presuntamente por acción u omisión y con distintos grados de responsabilidad– la muerte de un deportista argentino de reconocimiento internacional, se interrumpió abruptamente con la declaración de nulidad de todo lo actuado desde el inicio en las audiencias de ese debate que había comenzado el 11 de marzo de 2025. Aunque el debate era público, se establecieron algunas restricciones a la prensa y se prohibió grabar el desarrollo de las audiencias.

La causa que motivó la nulidad se originó en la recusación y apartamiento de una de las juezas que integraban el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires por las *sospechas de parcialidad* que habían recaído sobre la magistrada, Julieta Maquintach.

El hecho detonante fue la grabación permitida por la jueza –aparentemente y por lo que sostuvo el presidente del Tribunal, en secreto– de imágenes de las audiencias orales

en las que parecía destacarse su presencia a fin incorporarlas a la producción de una miniserie documental que llevaría por título “Justicia Divina”.²⁹

Dos días antes de que se tomaran imágenes en la primera audiencia del debate oral –el domingo 9 de marzo de 2025– se habían obtenido capturas fílmicas de la jueza caminando por los pasillos y en diferentes ambientes del edificio sede de los Tribunales de San Isidro, aparentemente para integrarlas a la miniserie en cuestión. El equipo de filmación habría ingresado a los Tribunales con la autorización de la jueza quien habría consentido que se tomaran las imágenes indicadas que la incluían.³⁰

²⁹ Según lo que habría expresado el guionista de la presunta serie -en su escrito ante la Fiscalía N° 1 de San Isidro que investiga si la magistrada incurrió en algún delito al autorizar la grabación de imágenes en las audiencias, la serie tendría seis capítulos titulados: “La justicia y los lugares”; “La justicia y los dioses”; “La justicia y los abogados”; “La justicia y los familiares”; “La justicia y el azar” y “La justicia y la sentencia”.

³⁰ De acuerdo al registro de los acontecimientos que realizó parte de la prensa escrita, ese día el equipo de filmación permaneció “por casi diez horas en los tribunales” y la jueza “realizó, al menos, dos cambios de ropa”. Cf..CARABAJAL, Gustavo –*Diez horas de filmación que aún no fueron explicadas*- La Nación, Buenos Aires, 24 de agosto de 2025.

La sorprendente conducta que habría exhibido la magistrada poco antes del inicio del debate oral, y durante el juicio, fue evaluada con severidad por el Fiscal actuante quien reveló el contenido del *trailer* de la serie proyectada en plena audiencia, causando asombro y comprensible indignación en quienes asistían al desarrollo del proceso y eran parte interesada de lo que en definitiva se decidiera por el tribunal oral. Al calificar el despropósito, el fiscal sostuvo que la magistrada “ofició de actriz, no de jueza”. Ante lo que allí se exhibió, los reclamos de recusación no se hicieron esperar.

El apartamiento de la jueza involucrada y la nulidad decretada más tarde suscitó un estrépito de proporciones y generó una amplia repercusión en los medios de comunicación, nacionales e internacionales, en parte por la persona de la presunta víctima –Diego Armando Maradona– cuyo fallecimiento se atribuía a las personas a cargo de su cuidado médico y personal. Según lo que parecía emerger de la conducta de la jueza, esta había habilitado la filmación de una miniserie sobre el juicio oral en el que participaba como magistrada, *durante el desarrollo de las audiencias y con*

ella como protagonista y, por ende, antes de que concluyera su función jurisdiccional en el caso.

Estas conductas parecían a todas luces una pérdida de la imparcialidad en el proceso a fin de favorecer un interés personal –¿de lucimiento? ¿de protagonismo? – por sobre el deber de administrar justicia bien y con objetividad. Todo ello por sobre los derechos de las partes, en especial de los imputados. Lo sucedido tuvo un efecto devastador sobre el caso en particular y sobre la rigurosidad que deben de tener los magistrados en el ejercicio de la judicatura.

Pero, no obstante, operaron los reaseguros. En primer lugar por la pronta reacción de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tribunal que ejerce la Superintendencia sobre la judicatura local.

En efecto, el 28 de mayo de 2025 un día después de que se conociera la recusación y el apartamiento de la jueza involucrada, la Suprema Corte, de oficio; inició las

actuaciones a raíz de “las graves irregularidades atribuibles a la Dra. Julieta Maquintach”. En consecuencia de ello, emitió la resolución 1376/25 en virtud de la cual decidió licenciar a la magistrada por el término de noventa días y conferir vista al Procurador General de lo actuado, a fin de que evalúe el actuar de la jueza en orden a la pertinencia de la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.³¹ Invocó, para ello, las atribuciones que inviste como cabeza del Poder Judicial de la Provincia –en adición a la necesaria intervención del jurado de Enjuiciamiento– para “intervenir en toda cuestión que pudiera afectar la normal prestación del servicio de justicia” en resguardo de los derechos de los justiciables.

Para fundar ambas decisiones, la Corte provincial señaló que “La gravedad de los hechos [...] investigados denotarían el incumplimiento de deberes que podrían comprometer a la magistrada en distintas esferas de responsabilidad”. A más, el Tribunal destacó que el análisis

³¹ Cf. SCJ. Resolución 1376/25 emitida por unanimidad por los tres integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires jueces Hilda KOGAN, Sergio Gabriel TORRES y Daniel Fernando SORIA.

de los antecedentes...permite advertir las características inusitadas de la participación que habría tenido la magistrada en un *film* o video, supuestamente documental, referido al proceso penal...a cuyo desarrollo ajustado a derecho debía destinar su excluyente atención.” pues sobre ello debía sentenciar. Por fin, la Corte advirtió que a primera vista, la jueza habría tenido una “conducta alejada de la sobriedad, la medida, y la corrección exigible a todo servidor [del poder Judicial]”, De esta manera tal obrar “sería inconciliable con el decoro y la prudencia que impone el apego a la juridicidad [y] contrastaría abiertamente con el desempeño responsable de la jurisdicción”.³²

Conviene prestar atención a las calidades que se exigen a todos los servidores del Poder Judicial según se enumeran en la Resolución de la Suprema Corte provincial, y las reitero: *sobriedad, medida, corrección, decoro, prudencia*, ésta última, agregó, una de las virtudes cardinales indispensables en quienes tienen el honor y la responsabilidad

³² Cf. consid. I y III de la Resolución 1376/2025 de la SCJ de la Provincia de Buenos Aires.

de juzgar a sus semejantes. Estas conductas deben enlazarse –en este caso– con el ya citado Art. 60 del Código Iberoamericano de Ética acerca de que el juez *“debe evitar comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social”*.

Ante la alternativa de que su conducta fuese examinada por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 2025 la magistrada presentó su renuncia ante el Gobernador del Estado local, quien no la aceptó ni la rechazó perdiendo la oportunidad legal de aceptarla, porque el Jurado declaró admisible la acusación contra la jueza el 28 de agosto. Antes de producirse esta caducidad la Asociación Judicial Bonaerense se había dirigido por nota al ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires solicitando el rechazo de la renuncia de la magistrada. El sindicato interpretó que era imprescindible garantizar el juzgamiento político de la conducta de la jueza dado que evadir esta instancia “sería consagrar la impunidad institucional, en perjuicio del interés

público y el principio de responsabilidad de quienes ejercen funciones judiciales”.³³

En consecuencia, eliminada la posibilidad de eludir el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento la jueza alegó, en su defensa ante el organismo, que no hubo filmación prohibida pues los otros dos integrantes del tribunal oral conocieron, consintieron y avalaron las grabaciones en las audiencias y planteó dos recusaciones por parcialidad manifiesta que fueron rechazadas. Así, el enjuiciamiento seguirá su curso en el que deberán respetarse todas las garantías de la defensa y las pruebas que quiera presentar la magistrada judicial, conforme a derecho.

Con anterioridad a la finalización del proceso que no ha concluido hasta lo que esto escribo –mediados se septiembre de 2025– se produjeron efectos allende la jurisdicción provincial en la que se sucedieron los hechos que dieron lugar a la nulidad de las actuaciones ante el

³³ Cf. Nota de la Asociación Judicial Bonaerense al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 2 de julio de 2025.

Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, a la recusación y apartamiento de una jueza que lo integraba y al sometimiento de esta magistrada al Jurado de Enjuiciamiento.

Así, fue dado a publicidad y presentado un proyecto de Código de Ética para magistrados del Poder Judicial de la Nación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, por iniciativa de una de las consejeras, del presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, de la presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.³⁴ En línea con el Código Iberoamericano de Ética Judicial ya referido, merecen destacarse aquí los principios y conductas a la que deben ajustarse los magistrados judiciales: la *neutralidad*, el *decoro* –incluye expresamente el *respeto por la investidura judicial*, la *modestia* y la *austeridad*, el *comportamiento ejemplar*–; la

³⁴ Cf. drive.google.com/file/d/1eCdVP9. La consejera Jimena de la Torre quien impulsó el proyecto que replicó en su red social de X @JimenadelaTorreBA, hizo referencia al caso “Maquintach” aunque aclaró que hacía meses que trabajaban en ese proyecto.

integridad institucional que requiere, expresamente, un *uso de las redes sociales con prudencia y discreción*.³⁵

Como se advierte, las conductas señaladas y requeridas a los magistrados por el Código Iberoamericano de Ética Judicial, por la Resolución 1376/2025 de la SCJ de la Provincia de Buenos Aires y por el proyecto de Código de Ética para magistrados del Poder Judicial de la Nación exceden lo que estrictamente podría considerarse buen desempeño funcional aunque algunas de esas actitudes están directamente relacionadas con ese desempeño y todas, con la buena conducta que de modo expreso indica el Art. 110 de la Constitución Nacional para conservar la inamovilidad en el cargo. De particular importancia, así lo interpreto, es la exigencia de un uso discreto y prudente de las redes sociales que enuncia el proyecto de Código de Ética para los jueces nacionales.

³⁵ Cf. Art. 7º, 8º, 9º y 22 del proyecto de Código de Ética.

4. Los criterios de selección de jueces y la necesidad de neutralizar la discrecionalidad del Pleno del Consejo de la Magistratura

A las calidades enunciadas que pueden incluirse en una de las cuatro idoneidades requeridas a los jueces, la ética, según las articuló la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino deben añadirse, para conformar el perfil del juez: la técnico jurídica; la física y psicológica y la gerencial.³⁶

La buena conducta –la conducta ética– es imprescindible para conservar la inamovilidad en el cargo y resguarda a los jueces de remociones arbitrarias o amañadas por intereses extra jurisdiccionales en desmedro de la independencia judicial. No obstante, debe prestarse especial atención a los criterios para seleccionar a los jueces. Las pautas y los instrumentos utilizados para esa selección devienen, en consecuencia, críticos para el subsistema judicial y para el sistema político institucional del país.

³⁶ El Diálogo Argentino fue un intento de la sociedad civil por encausar la grave crisis económica y social desatada en el país en 2001- 2002. Cf. “Perfil del Juez, de la Mesa Permanente del Diálogo Argentino. La Ley. Suplemento Realidad Judicial. Buenos Ayres, 15 de agosto de 2003.

En 1994 se tomaron dos decisiones por la Convención Constituyente de este año a fin apartar las designaciones de los magistrados judiciales de la excesiva influencia político partidaria. Por un lado, se creó el Consejo de la Magistratura para intervenir en los procesos de selección. Por otra parte, se estableció que el presidente de la Nación debe nombrar a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado en *sesión pública* convocada al efecto y a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en *sesión pública*, en la que se tendrá en cuenta la *idoneidad* de los candidatos.³⁷ La publicidad de las audiencias ante el Senado favorece el control social, la transparencia del proceso y las responsabilidades ulteriores por los acuerdos o rechazos que se decidan.

A estas modificaciones se agregó, más tarde, el Decreto PEN 222/2003 emitido en uso de atribuciones autónomas del presidente de la Nación y denominado de

³⁷ Cf., respectivamente, Art. 114 y 99, inc. 4 de la CN.

autolimitación que dispuso un control social de las propuestas de magistrados judiciales a la Corte Suprema, antes de la evaluación de éstos por parte del Senado de la Nación. Entre otras, la norma señaló la necesidad de requerir idoneidad moral y técnica a los candidatos; compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos.³⁸ Por Decreto 588/2003 el presidente de la Nación extendió el procedimiento de evaluación social de los candidatos seleccionados por el Consejo de la Magistratura, antes de que el Poder Ejecutivo elija uno de entre ellos para enviar el pliego respectivo al Senado de la Nación.

Pese a estos recaudos y en especial en el proceso de selección de jueces ante el Consejo de la Magistratura mediante concursos públicos de oposiciones y antecedentes, se han advertido alteraciones que desvirtúan la finalidad del nuevo sistema. En efecto, en la entrevista pública que debe realizarse a los seleccionados, el Pleno del Consejo puede

³⁸ Decreto 222/03 (BO 20/6/2003) Examiné la norma y la primera experiencia que bajo ella se concretó en GELLI, María Angélica, *La elección de los integrantes de la Corte Suprema y las ventajas comparativas de la visibilidad social*, La Ley. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2003.

revisar de oficio las calificaciones de los exámenes escritos, de los antecedentes, impugnaciones y dictámenes. Aunque toda modificación de las decisiones de la Comisión debe fundarse suficientemente, constituye una atribución controversial que podía facilitar las eventuales arbitrariedades de los consejeros o los *canjes* entre candidatos. De este modo, el criterio de máxima idoneidad de los magistrados judiciales puede mudarse por la pauta de las compensaciones entre postulantes patrocinados por uno u otro partido político. Como puede advertirse, los cambios de lugar en el orden de mérito luego de realizada la entrevista pública no debieran basarse en la impresión que causaron los examinados, sino en sólidas motivaciones que no desvirtúen o ignoren las calificaciones técnicas.

Por cierto, es difícil evaluar cómo será la conducta ética de los postulantes en el futuro. Sin embargo, pueden apreciarse el modo en que se comportaron en el proceso de selección, cuán preparados estaban –porque en esa conducta también se evidencia la responsabilidad– y si pese a los bajos resultados en la prueba de oposición aceptaron la

modificación del lugar que ocupaban en las ternas, para beneficiarse con ese cambio.

5. La formación de los jueces. Deberes de las universidades y de la sociedad civil

Permítaseme una referencia personal. En los ya muy lejanos días de la experiencia estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, prevalecía el estudio de Hans Kelsen para descifrar qué era el derecho. Aunque entonces se lo controvertía –tal como se lo discute hoy desde otras perspectivas– no pude evitar caer bajo el influjo del rigor de su análisis. Pero, ya entonces, me parecía advertir en las discusiones que manteníamos los estudiantes –en las aulas y fuera de ellas– que se ignoraba la diferenciación *metodológica* que efectuaba el autor entre derecho y moral de la *ontológica*. Es que lo que parecía emerger en parte de la comunidad académica de Derecho era una mengua –¿desprestigio, quizás?– de la moral en el derecho, como si esta dimensión lo contaminara con pura ideología. Y ello, a pesar de que el artículo 19 de la Constitución Nacional, insoslayable en el resguardo de las

libertades personales, refería expresamente a la moral pública. A más, no debe desestimarse la atribución de ambas Cámaras del Congreso de la Nación establecida en el Art. 66 de la Ley Suprema, en tanto esta norma dispone que cada una de ellas está facultada para remover a sus miembros por *inhabilidad* física o *moral* sobreviniente a su incorporación y hasta excluirlo de su seno, con los dos tercios de votos.

Si, la moral es un valor constitucional. En consecuencia, en las Escuelas de Derecho debe examinarse la cuestión en las decisiones jurídicas y, en especial, considerar las conductas éticas de los estudiantes medidas, por ejemplo, en la transparencia de las pruebas de evaluación que rinden, en la desaprobación del plagio en todas sus formas, en la desaprobación del uso deshonesto –que es inadmisibile– tanto como el empleo negligente de la Inteligencia Artificial (IA), en especial la generativa porque serán abogados, habilitados para ejercer como tales, como asesores en la administración, como magistrados judiciales.

Aunque referida a los deberes de los abogados en el ejercicio de su profesión, las consideraciones de un tribunal

londinense aplican a todos quienes pasan por las Facultades de Derecho a propósito de las “responsabilidades profesionales y *éticas*, así como con sus deberes ante el tribunal” por citas falsas de precedentes judiciales inexistentes o, al menos, con negligencia grave al presentar esas citas en sus escritos judiciales. Dado que la IA es una “herramienta que conlleva riesgos y oportunidades [...] su uso debe realizarse con un grado adecuado de supervisión y dentro de un marco regulatorio que garantice el cumplimiento de estándares profesionales y *éticos* bien establecidos, si se desea mantener la confianza pública en la administración de justicia”. En consecuencia, “quienes utilizan inteligencia artificial para realizar investigaciones jurídicas, tienen el deber profesional de comprobar la exactitud de dichas investigaciones consultando fuentes fidedignas antes de utilizarlas en su labor profesional”³⁹

³⁹ Cf. párr. 3, 5 y 7 de High Court of Justice, London, 06/06/2025. The King on the application of Frederick Ayinde, Hamad Al-Haroun c. The London Borough of Haringey, (1) Qatar National Bank QPSC (2) QNB Capital LLC. Sumarios en La Ley, 14 de Julio de 2025. Publicación que remite al fallo completo del que se tomaron las citas. (Bastardillas agregadas). La sentencia concernía al examen de las conductas de abogados que presentaron en sus demandas cinco y dieciocho casos falsos (inexistentes), respectivamente. En este último caso, el cliente aseveró que fue él quien haciendo uso de IA y otros motores de búsqueda en Internet había preparados los documentos presentados. El abogado se hizo cargo de su responsabilidad, corroborando lo que manifestó

En la formación integral de los estudiantes, futuros jueces y abogados se inicia la construcción de una conducta ética profesional. Pero además cabe a los ciudadanos una actitud de respeto a las instituciones y a las sentencias de los tribunales. El sistema provee instrumentos para lograr las revisiones judiciales lejos, bien lejos, de la politización partidista. A los medios de comunicación les corresponde aportar a la reconstrucción del sistema con sus opiniones críticas, pero sin naturalizar los desvíos o aquellas influencias como algo previsible y que, casi, no puede modificarse. Diría, a todos se nos exige una actitud de alerta sobre una cuestión crucial como lo es la dignidad y el decoro de los jueces.

su cliente, lego además. Si los dichos de ambos fueron ciertos, como aceptó el Tribunal, la conducta del abogado fue de una negligencia inaudita. Según se dejó consignado, a más de los dieciocho casos inexistentes, muchos de los que sí existían, no contenían las citas atribuidas, “no respaldaban las proposiciones por las que se citaban y no eran pertinentes al objeto de la solicitud”. Cf. párr. 74.